

Por diversas causas

Vetados para la política: los dirigentes cuyos objetivos se ven frenados por la justicia

En Latinoamérica y Europa se encuentran casos de rostros populares que están inhabilitados para cargos públicos.

J. T. TENORIO

Son de los rostros más populares en el escenario político de sus respectivos países, capaces de liderar grandes masas y estar entre los primeros lugares de encuestas de intención de voto, pero a quienes los líos judiciales les impiden hoy su objetivo de alcanzar el poder. Desde acusaciones que van de abuso de poder hasta participación en casos de corrupción, las causas que enfrentan estos dirigentes son varias, aunque entre todos ellos comparten un discurso que apunta a supuestas persecuciones en su contra.

■ Jair Bolsonaro

Expresidente de Brasil (2019-2023) y líder de la derecha dura en su país, Bolsonaro está inhabilitado políticamente hasta 2030 luego de que la justicia determinara que buscó interferir en las elecciones de 2022. Según el Tribunal Superior Electoral, intentó deslegitimar los comicios —en los que perdió contra el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva— al poner en duda la integridad del sistema de votación frente a diplomáticos.

El panorama para Bolsonaro se ve aún más complejo por el juicio que enfrenta por un presunto plan de golpe de Estado contra el retorno al poder de Lula, por el que arriesga más de 40 años de



BOLSONARO fue inhabilitado políticamente hasta 2030.



FERNÁNDEZ está en prisión domiciliaria en Buenos Aires.



MORALES dice que debe ser candidato presidencial.



LE PEN es la líder de la derecha dura en Francia.

cárcel. El caso provocó fuertes tensiones entre el gobierno de Lula y el estadounidense de Donald Trump, cercano a Bolsonaro, quien exigió el fin del juicio, sancionó a los magistrados involucrados y amenazó con aranceles del 50% a Brasil.

Bolsonaro, a quien la justicia le impuso a mediados de julio una tobillera electrónica, ha convocado a varias manifestaciones multitudinarias en ciudades como São Paulo y Río de Janeiro para presionar a la justicia, mientras que mantiene su intención de postular nuevamente a la presidencia en 2026.

■ Cristina Fernández

La líder kirchnerista y Presidenta argentina entre 2007 y 2015

quedó inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos luego de que la Corte Suprema rechazara en junio su apelación a una condena recibida previamente por corrupción. La también vicepresidenta entre 2019 y 2023 vio además confirmada una condena a seis años, que cumple en su casa, por su participación en un esquema de licitaciones irregulares de obra pública.

Enfrentada a varias causas judiciales desde hace años, Fernández reclama ser la víctima de *lawfare*, una persecución judicial con fines políticos, algo que también reclama sus seguidores.

Poco antes de que se confirmaran las medidas en su contra, la expresidenta aseguró que sería candidata a las elecciones legisla-

tivas de la provincia de Buenos Aires, en septiembre.

■ Rafael Correa

Presidente de Ecuador entre 2007 y 2017, fue condenado en 2020 a ocho años de prisión por cohecho en el llamado "caso sobornos", e inhabilitado políticamente de por vida. Próximo a ser candidato a la presidencia en Bélgica, donde tiene asilo, Correa también invoca la figura del *lawfare* para rechazar las acusaciones en su contra.

Correa sigue siendo una figura de gran influencia en la izquierda ecuatoriana y se mantiene como líder de su partido Revolución Ciudadana. El exmandatario fue clave en el ascenso de su protegida Luisa

blo, como una escisión de su Movimiento al Socialismo (MAS) para intentar presionar por su postulación. Sus simpatizantes amenazaron con impedir las elecciones si no se permite la participación de Morales, quien asegura que volver a ser candidato es un "derecho humano".

■ Marine Le Pen

Líder indiscutida de la extrema derecha francesa y mayor rival del Presidente Emmanuel Macron, contra quien perdió en la segunda vuelta de las últimas dos elecciones presidenciales (2017 y 2022), Le Pen sufrió en marzo un duro golpe a sus ambiciones al ser inhabilitada durante cinco años para optar a cargos públicos.

Declarada culpable de malversación de fondos junto a ocho eurodiputados de su partido Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés), Le Pen rechazó los cargos en su contra y acusó un intento de condenarla a la "muerte política". Aunque el fallo de la justicia no la privó de su cargo actual de diputada y da espacio a que se recurra en instancias superiores, la aplicación inmediata de la sentencia y un dilatado proceso de apelación la tierran prácticamente fuera de la carrera presidencial de 2027.

Sin la posibilidad de que Macron se presente nuevamente a la reelección, y sin un sucesor designado por su sector, los comicios de 2027 presentaban a Le Pen una gran oportunidad para lograr la presidencia, con su partido como el favorito en las encuestas. Ahora la líder de RN bajaría la opción de presentar a su protegido, Jordan Bardella, como su carta presidencial.

El expresidente incluso creó su propia plataforma, EVO Puen-